

L-622-8

PROYECTO DE ARANCEL

PARA LOS

JUZGADOS MUNICIPALES

QUE LA MAYORÍA DE LA COMISIÓN, CREADA POR REAL DECRETO DE 12 DE AGOSTO DE 1907

ELEVA AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR MINISTRO DE

GRACIA Y JUSTICIA

EN CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO

DEL CITADO REAL DECRETO



MADRID

Establecimiento tipc-litográfico de F. Rodríguez Ojeda

Calle de la Montera, núm. 10

1907

Ayuntamiento de Madrid

FM 2195

PROYECTO DE ARANCEL

PARA LOS

JUZGADOS MUNICIPALES

QUE LA MAYORÍA DE LA COMISIÓN, CREADA POR REAL DECRETO DE 12 DE AGOSTO DE 1907

ELEVA AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR MINISTRO DE

GRACIA Y JUSTICIA

EN CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO
DEL CITADO REAL DECRETO

Reg.º 2424.

MADRID

Establecimiento tipo-litográfico de F. Rodríguez Ojeda

Calle de la Montera, núm. 10

1907

PROYECTO DE LEY

INSTRUMENTOS MUNICIPALES

QUE SE PRODUCE EN LA CIUDAD DE MADRID

GRATIA Y JUSTICIA

DE LA CIUDAD DE MADRID



1861



EXCMO. SR.:

Al tener la mayoría de esta Comisión el honor de elevar á V. E. su proyecto de Arancel para los Juzgados municipales, cumpliendo con lo mandado en el Real decreto de 12 de Agosto último y Real orden del mismo mes, séale permitido ante todo hacer constar su sentimiento por haber disentido de la opinión de su dignísimo Presidente en la realización de aquel trabajo.

La mayoría de la Comisión no puede aceptar el proyecto presentado por su Presidente, y que, como voto particular, mantiene en unión del Sr. Juez Decano de los de primera instancia de esta Corte, porque entiende que con él no quedan servidos en la proporción adecuada los intereses de la Justicia ni tampoco el de los funcionarios encargados de administrarla y auxiliarla, principios estos que, á juicio de la mayoría de la Comisión que hoy tiene el honor de dirigirse á V. E.; deben informar toda labor de la índole y alcance de la presente.

No se hallan servidos los intereses de la Justicia en el proyecto del Sr. Presidente, porque la fijación de un tipo único, exclusivo é igual para todos los asuntos trae aparejada igualdad absoluta; y es axiomático que la igualdad absoluta es en todos los órdenes de la vida la más irritante de las desigualdades.

Establecer, como lo hace el Sr. Presidente, una cantidad fija y determinada en beneficio de los Adjuntos, con cargo á los honorarios del Juez y del Secretario, obligando á éste á practicar semanalmente la liquidación de lo que aquellos hayan de percibir, así como la intervención concedida á los suplentes de Juez y Secretario, en los haberes de éstos se compadece mal con la misión que la ley encomienda á cada uno de aquellos funcionarios, y constituye una especie de trabazón ó ligamento entre los individuos que componen el Tribunal, que destruye la serena independencia á que tienen derecho por ley, por naturaleza y por prestigio.

La remuneración con que dota el Sr. Presidente en su proyecto á los funcionarios, resultará en ocasiones determinadas, exagerada, en la generalidad de los casos, mezquina, y en definitiva, insuficiente para que los Jueces y Auxiliares atiendan ni siquiera modestamente á sus necesidades. Tal afirmación se demuestra con toda claridad en el estado que se acompaña con el número 1, en el cual,

si bien se hace el cómputo sólo por lo que á Madrid se refiere, es bastante para formar idea de la triste situación en que se hallarían los funcionarios del resto de España, teniendo en cuenta el número de asuntos que en cada Juzgado se tramitan; debiendo significar que la estadística utilizada para este trabajo es de comprobación fácil, bien por medio de una investigación á cargo de la Inspección de Tribunales, ó por cualquier otro que seguramente será el mejor si es debido á la iniciativa de V. E.

Expuestos sucintamente los motivos en que se funda la mayoría de esta Comisión para discrepar, con harto sentimiento suyo, de la opinión de su dignísimo Presidente, pasa á consignar los fundamentos en que se ha inspirado por su parte la labor que por V. E. fué encomendada á la Comisión.

Acordado por unanimidad de criterios rechazar el sistema detallista de tasación por diligencias aisladas, la mayoría de la Comisión que subscribe se decidió por el de tasación por conceptos, estableciendo un tanto por ciento progresivo en relación con la cuantía litigiosa, y tanto alzado y fijo cuando ésta sea indeterminada, pero siempre atendiendo á la importancia del asunto, servicio que por él haya de obtener el litigante y labor retribuable de los funcionarios.

Huir del sistema de tasación por diligencias aisladas, es atender las enseñanzas que la práctica brinda, corrigiendo así abusos, si alguno hubiera podido cometerse, y disipando en definitiva la leyenda vulgarizada de que los curiales (séanos permitida la frase), estiran el Arancel por su inmoderado afán de lucro.

El sistema elegido de tasación por conceptos, ahuyenta todo temor del mal apuntado, porque si, lo que no es creíble, hubiese algún interés personal de parte de los funcionarios por lo que al extremo que nos ocupa se refiere, más inclinado sería á la disminución que al aumento de diligencias, con lo cual, en suma, ganaría en brevedad el procedimiento. Establecer un tanto por ciento progresivo en relación á la cuantía litigiosa de cada asunto, no es más que adoptar para este caso el medio aceptado por todos los sistemas de tributación que se inspiran en los principios más rudimentarios de Economía política, logrando así que se cumplan las leyes de proporcionalidad que deben presidir en todo trabajo arancelario.

Estudiado con todo el detenimiento que merece este asunto, se han establecido los tipos de tanto por ciento que, según la índole de cada negocio, ha estimado esta mayoría de la Comisión como más justos, creyendo haber conseguido con ellos una remuneración modesta pero suficiente para los funcionarios, y habiendo logrado seguramente una notable disminución en el coste de cada asunto, que producirá una economía para el litigante de más de un 30 por 100 en la generalidad de los asuntos, economía que en algunos, como en determinada clase de juicios ocurre, llega hasta rebasar el 50 por 100.

En el juicio declarativo verbal, se ha fijado el tipo de 15 por 100 como total y límite máximo de percepción, reduciendo en un 30 por 100 la cifra que hoy

puede devengarse por dicho concepto; y aún se reduce más cuando la cuantía litigiosa excede de 100 pesetas, pues en estos casos se llega á rebasar el 50 por 100. como ocurrirá con el juicio en que se litiguen 250 pesetas que, con arreglo al vigente Arancel, pueden devengarse 125, y conforme al proyecto que la mayoría de esta Comisión somete á la aprobación de V. E. no podrán exceder de 45.

En el juicio de desahucio, no ha estimado conveniente la mayoría de la Comisión respetar los tipos establecidos en el Real decreto de 15 de Agosto de 1902, porque al crear tipo fijo de tasación para asuntos de cuantía determinada, rompía con el sistema que por estimarse más beneficioso y más científico tenía adoptado, destruyendo así la armonía de conjunto en este trabajo, y además, porque el sistema vigente trae por consecuencia el hecho de que un desahucio de habitación que rente 100 pesetas al año, satisfaga por costas 18 pesetas, es decir, la misma cantidad que el de una vivienda que devengue 240 de alquiler anual.

Para evitar esta igualdad que determina una enorme desigualdad, como decíamos al tratar del proyecto del Sr. Presidente, establece la mayoría de la Comisión el tipo de 10 por 100 de la renta anual, logrando así que el desahucio de una vivienda que rente 100 pesetas al año, devengue por el total de costas 10 pesetas en vez de las 18 que hoy satisface.

Para evitar que la proporción del 10 por 100 de la renta anual pudiese alcanzar en alguna ocasión una cifra exagerada, se han establecido las limitaciones que la práctica y la costumbre aconsejan, y además se ha disminuido considerablemente el tipo de tasación cuando la renta anual excede de 250 pesetas, logrando así que esta clase de juicios supongan para los propietarios de fincas un desembolso casi siempre menor y nunca mayor que el que verifican en la actualidad.

En los asuntos de cuantía indeterminada, como ocurre en todo lo relativo á jurisdicción volutaria, no podía seguirse el sistema de tanto por ciento, siendo indispensable concretar la suma de honorarios; al fijar ésta, se ha inspirado la mayoría de la Comisión en primer término en la índole especial de cada negocio, importancia que dentro del orden jurídico, social ó familiar tiene, y en segundo en las condiciones que por las leyes de procedimiento se exigen, con relación á la tramitación de los expedientes, más en todos los casos se han fijado cantidades inferiores á las que actualmente rigen; así en el expediente para constituir el Consejo de familia, en el cual hoy ascienden las costas á 40 ó 50 pesetas, llegando en algunas ocasiones hasta 100 y más, se ha fijado la suma de 25 pesetas. En las actas para hacer constar el consentimiento ó consejo para contraer matrimonio y para otras resoluciones derivadas de la patria potestad, se han reducido los tipos en términos que oscila entre el 30 y 50 por 100 la rebaja establecida.

Un servicio que venía prestándose gratuitamente, ha creído justo la mayoría de la Comisión dotarle con algún emolumento. Por la legalización y sellado de las hojas de los libros que llevan los comerciantes no satisfacen cantidad alguna

y no es ni siquiera equitativo que tal labor, realizada las más de las veces en beneficio de empresas ó sociedades de crédito, transportes, emisión ó descuento, y siempre en el de personas que en ningún caso podrían invocar el beneficio de pobreza, se lleve á efecto graciosamente por funcionarios que no tienen más emolumentos que la remuneración correspondiente á su trabajo.

Otra clase de servicios que se hallan remunerados en la actualidad ha estimado procedente la mayoría de la Comisión declararlos exentos de pago por la condición especial de las personas que en ellos intervienen; así en los expedientes que se tramitan para justificar el extravío de la licencia ó certificado que acredite el servicio en el ejército, se practicarán gratuitamente; porque es de suponer que quien contribuyó con prestación personal al servicio de las armas no se halle en condiciones de holgura en su posición social.

El servicio de repartimiento de negocios, establecido en el art. 19 de la Ley de reforma de la Justicia municipal, deberá realizarse sin exacción de derechos, porque encomendada esa labor á los mismos Jueces, que turnarán entre sí á ese efecto, es conveniente no asignar retribución en este caso para evitar así que vulgares interpretaciones atribuyan á la intervención de los funcionarios, no el interés noble por la mejor marcha del servicio, sino el bastardo que tiene por origen los dictados de la codicia.

En la parte referente á los asuntos de materia criminal, no se ha introducido más novedad que la indispensable de dotar á los adjuntos con un emolumento proporcional, y reglamentar, reduciéndolos, los honorarios de determinados peritos.

La dotación que se establece para los adjuntos en toda clase de negocios en que intervienen se ha procurado hacerla proporcionada á su labor, y se ha tenido en cuenta que para ellos no existe ninguna limitación legal en el ejercicio de su profesión ú oficio, ni tampoco han de contribuir al sostenimiento del personal y material del Juzgado respectivo, toda vez que se dispone que estos gastos sean de cuenta del Juez y Secretario por iguales partes.

No se oculta á la mayoría de esta Comisión que el sacrificio que se impone á los funcionarios es grande, mucho más teniendo presente que leyes recientemente promulgadas, han aumentado su trabajo sin que por ello hayan sido remunerados; y por eso ha procurado compensar en lo posible á los que prestan sus servicios en poblaciones de escasa importancia, dotándoles con alguna mayor retribución en los casos que oportunamente se expresa, pero sin que tal aumento haga que la Justicia sea más cara ó más barata según las comarcas, pues únicamente se ha establecido ese aumento para cuando los funcionarios se vean obligados á salir del punto de su residencia.

Las incompatibilidades establecidas en la Ley de reforma de la Justicia municipal; la limitación, mejor dicho, la negativa de toda orientación que encauce

el ánimo á la esperanza de mejorar, que es lo que más alienta á todo espíritu laborioso; y la seguridad de que los medios de vida, cuando las energías amenguan y la actividad mental y corporal disminuyen, no han de procurarse por otros caminos que los que la propia iniciativa y personal administración aporten, son otras tantas razones que han pesado en el ánimo de la mayoría de la Comisión para procurar que los funcionarios obtengan una retribución decorosa y adecuada, además, la consideración de las funciones que les son encomendadas, obliga á colocarles en situación que no permita dudar ni un solo momento de su probidad y su honradez; y así como la Ley penal es más severa con los que, hallándose al servicio del Estado, se apartan de la senda por que les guían aquellas virtuosas cualidades, así también, cuando el Estado no puede por su situación económica proporcionar á sus servidores medios de vida decorosa y adecuada á sus funciones, se halla en el deber de reglamentar la lícita retribución de los servicios, no ya por vía de compensación generosa, sino por debida remuneración, pues en este sentido las labores de todos los funcionarios son igualmente estimables y no más sagradas las atenciones de los unos que las de los otros, con la desventaja para los Jueces municipales y Secretarios, que no existe para ellos la esperanza del ascenso ni el mejoramiento por quinquenios, ni el derecho á jubilación; y por lo que á los últimos se refiere, ni aun siquiera que se les computen los años de servicio para ingresar en una carrera por turno favorable.

La mayoría de la Comisión, teniendo en cuenta estas consideraciones, ha establecido los tipos de percepción que ha creído justos; con la aplicación de ellos estima suficientemente dotados los servicios en una medida modesta y decorosa; y evita que la fantasía vulgar atribuya á los Jueces municipales y Secretarios de las grandes poblaciones una facilidad y rapidez exagerada en su enriquecimiento, que se haya muy lejos de la realidad; siendo buena prueba de ello el resultado que arroja el estado adjunto con el número 2. (1).

Al dar cima la mayoría de esta Comisión á la labor encomendada por V. E. en su Real orden de 14 de Agosto, quédale la satisfacción del deber á conciencia cumplido, satisfacción que se agiganta ante la consideración de merecer acogida favorable por parte de V. E. que en su elevado criterio, por todos reconocido, sabrá apreciar que este trabajo, imperfecto por ser nuestro, revela el ideal que nos guió, dar á cada uno su derecho; ideal que constantemente vemos reflejado en cuantas resoluciones dimanen de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.

Madrid veintiséis de Octubre de mil novecientos siete.

El Diputado 4.º del Colegio de Abogados,
Ant.º Gabriel Rodríguez.

El Decano del Colegio de Escribanos,
Fermín Suárez Jiménez.

El Decano del Colegio de Procuradores,
Hilario Dago.

El Secretario del Juzgado municipal del distrito del Hospital, acepta este proyecto salvando el tipo del tanto por ciento establecido para el juicio verbal, porque cree debe de ser igual para todos y más elevado que el que se fija,

José Ballester.

(1) No se publican ninguno de los dos estados á que se alude en el Preámbulo por ser innecesarios para el fin que se propone esta publicación.

PROYECTO DE ARANCEL PARA LOS JUZGADOS MUNICIPALES

TÍTULO PRIMERO

De los negocios civiles.

CAPITULO PRIMERO

De los juicios declarativos verbales, de los desahucios y actos de conciliación.

ARTICULO PRIMERO

En los juicios declarativos verbales siendo el importe de la demanda menor de 100 pesetas, se percibirán los siguientes derechos:

El Juez, 6 por 100 de la cantidad litigiosa.

El Secretario, 6 por 100.

Los dos adjuntos á repartir por mitad entre ellos el 1 por 100.

Los Alguaciles, 2 por 100.

Desde 101 pesetas á 500 se percibirán, además de los tipos anteriores, por la diferencia de 400 pesetas, los siguientes:

El Juez, 3 por 100.

El Secretario, 3 por 100.

Los dos Adjuntos á repartir, 0,50 por 100.

Los Alguaciles, 1,50 por 100.

En los juicios declarativos cuya reclamación no exceda de 1.500 pesetas y se refieran á las cuestiones que surjan:

1.º Entre posaderos y huéspedes.

2.º Entre cocheros y viajeros.

3.º Entre agentes de emigración y emigrantes.

4.º Entre marineros ó patronos de emigración y personas que transporten, siempre que tales cuestiones se refieran á gastos de posadas ó fondas, importe de transporte de mercancías ó de peajes de viajeros, indemnizaciones relacionadas con estas cuestiones, salarios devengados, con

ocasión de dicha clase de servicios y relaciones ó divergencias entre comprador y vendedor de animales en las ferias, se devengarán los derechos siguientes:

Hasta 500 pesetas los de las dos escalas anteriores, y desde 500 pesetas á 1.500, se percibirán por las 1.000 de diferencia.

El Juez, 0,50 por 100.

El Secretario, 0,50 por 100.

Los dos Adjuntos á repartir, 0,20 por 100.

Los Alguaciles, 0,30 por 100.

En los derechos de las tres escalas anteriores, se entienden comprendidos los de los embargos preventivos que se soliciten al mismo tiempo de proponer la demanda, según preceptúa el párrafo segundo del art. 1.379 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

ARTICULO II

En los juicios de desahucio cuya renta anual no pase de 250 pesetas, con inclusión de la ejecución de la sentencia, se percibirán los derechos siguientes:

El Juez, 4 por 100.

El Secretario, 4 por 400.

Los dos Adjuntos á repartir, 0,50 por 100.

Los Alguaciles, 1,50 por 100.

En ningún caso las costas podrán exceder de 20 pesetas.

En los de 250 pesetas á 1.000 pesetas de renta anual, se percibirán, además de los tipos anteriores, por la diferencia de 750 pesetas, los siguientes:

El Juez, 0,50 por 100.

El Secretario, 0,50 por 100.

Los Adjuntos á repartir, 0,20 por 100.

Los Alguaciles, 0,40 por 100.

En estos desahucios con inclusión de la ejecución de sentencia, no podrán exceder las costas de 30 pesetas

En los juicios de desahucio superiores á 1.000 pesetas de renta anual, se percibirán, además de las dos escalas anteriores, excluida la ejecución de sentencia:

El Juez, 0,25 por 100.

El Secretario, 0,25 por 100.

Los dos Adjuntos á repartir, 0,10 por 100.

Los Alguaciles, 0,20 por 100.

Las costas no podrán exceder de 40 pesetas hasta la notificación inclusive de la sentencia.

En los casos en que no se pague renta, se aplicará la primera escala hasta 20 pesetas.

ARTICULO III

Por el expediente de acto conciliatorio incluso la certificación que cada parte tiene derecho á obtener, percibirán el Juez y Secretario 3 pesetas cada uno, y los Alguaciles una peseta.

Si fuere más de un demandado, el Juez y Secretario percibirán una peseta más cada uno por cada demandado y cincuenta céntimos los Alguaciles.

Si dejare de celebrarse por falta de asistencia de una de las partes ó de ambas, se deducirá la cuarta parte de los derechos fijados.

ARTICULO IV

En la ejecución de las sentencias en los juicios declarativos verbales, percibirán el Juez, Secretario y Alguaciles, la mitad de los derechos que les son asignados en las respectivas escalas del art. 1.º aplicada á la cantidad concedida por capital en la sentencia.

ARTICULO V

En la ejecución de las sentencias en los juicios de desahucio superiores á 1.000 pesetas, el Juez, Secretario y Alguaciles, cobrarán la cuarta parte de los derechos que se les asigna en la escala respectiva del art. 2.º

ARTICULO VI

En la ejecución de lo convenido en acto conciliatorio, percibirán el Juez, Secretario y Alguaciles, la cuarta parte de los derechos que se fijan en las escalas del art. 1.º aplicada á la cantidad reconocida

ARTICULO VII

Repartida una demanda de juicio verbal ó de desahucio, si no llegase á celebrarse la comparecencia que la Ley establece, siempre que la causa no sea imputable al Juzgado, se percibirá solo la cuarta parte de los derechos fijados para cada caso.

Si el desistimiento ó la suspensión tuviere lugar estándose celebrando el juicio ó después de éste, antes de sentencia, la percepción de derechos se limitará al 75 por 100 de los asignados en las escalas respectivas.

ARTICULO VIII

En las cuestiones de competencia que se promuevan por inhibitoria y en las incidencias de recusación de Jueces, Adjuntos y Secretarios, se percibirá la mitad de los derechos que estén fijados para cada caso, según el juicio ó expediente de que se trate.

ARTICULO IX

En los incidentes de pobreza, cuando se deniegue este beneficio, se cobrarán los derechos que correspondan, dada la cuantía del juicio de que dimana y en la ejecución de la sentencia, la mitad de los que correspondan, según la escala aplicable.

ARTICULO X

Por todo cuanto se actúe para el aseguramiento de bienes en los casos de abintestato ó testamentaria que marca taxativamente la regla 5.^a del art. 63 de la Ley de Enjuiciamiento civil; percibirán:

	PESETAS
El Juez.....	25
El Secretario.....	25
Los Alguaciles.....	10

ARTICULO XI

En el caso de decretarse un embargo preventivo con carácter urgente, conforme dispone el art. 1.398 de la Ley de Enjuiciamiento civil, importarán todos los derechos hasta la remisión de los autos al Juez de primera instancia:

Hasta 3.000 pesetas.

El Juez, el 1,50 por 100.

El Secretario, el 1,50 por 100.

Los Alguaciles, 0,50 por 100.

Desde 3.000 pesetas hasta 10.000 límite de percepción, cobrará cada uno, además de los tipos que anteceden, el Juez y Secretario. el 0,50 por 100 sobre las 7.000 pesetas de diferencia, y el 0,25 por 100 los Alguaciles.

CAPÍTULO II

De la jurisdicción voluntaria.

ARTICULO XII

Por todo el expediente de constitución del Consejo de familia, incluso la certificación que se expida:

	PESETAS
El Juez.....	10
El Secretario.....	10
El Fiscal.....	3
Los Alguaciles.....	2

ARTÍCULO XIII

Siempre que por cualquier causa haya de procederse á la reconstitución de un Consejo de familia, se percibirá únicamente la mitad de los derechos que establece el artículo anterior.

ARTICULO XIV

Por el expediente ó acta de consentimiento ó Consejo paterno para contraer matrimonio; para ingresar en el ejército ó para espatriarse, incluso la certificación que se libre, percibirán:

	<u>PESETAS</u>
El Juez.....	2,50
El Secretario.....	2,50
Los Alguaciles.....	1,00

ARTICULO XV

Por el expediente que se forme para obtener el Consejo para contraer matrimonio, cuando no se otorgue espontáneamente, con inclusión del certificado, cobrarán:

	<u>PESETAS</u>
El Juez.....	5
El Secretario.....	5
Los Alguaciles.....	2

ARTICULO XVI

El expediente para hacer constar el extravío de la licencia ó certificación que acredite haber servido en el ejército, comprendido el certificado, no devengará derechos.

ARTICULO XVII

Por el depósito de una persona en los casos que faculta la regla 20 del art. 63 de la Ley de Enjuiciamiento civil, percibirán por todos los derechos:

	<u>PESETAS</u>
El Juez.....	10
El Secretario.....	10
Los Alguaciles.....	5

Si se le comisionase por el Juez de primera instancia, únicamente la constitución del depósito se cobrará la mitad de dichos derechos.

CAPITULO III

De los negocios de Comercio.

ARTICULO XVIII

Por la legalización de cada libro de comercio incluso el sellado de sus hojas y notas en el papel de Pagos al Estado, percibirán el Juez y el Secretario, una peseta cada uno, siempre que no excedan de 500 folios. Pasando de este número, cualquiera que sea, cobrarán el Juez y el Secretario otra peseta cada uno.

ARTICULO XIX

Por el expediente de siniestro á que se contrae el art. 404 del Código de Comercio, se percibirán por todos los derechos, incluso el certificado que se expida:

	<u>PESETAS.</u>
El Juez.....	5
El Secretario.....	5
Los Alguaciles.....	3

ARTICULO XX

Por el expediente de depósito de mercaderías transportadas, en el caso á que se refiere el artículo 369 del Código de Comercio y en los de informaciones que menciona el art. 2.110 de la Ley de Enjuiciamiento civil, se cobrará por todos los derechos:

	<u>PESETAS</u>
El Juez.....	10
El Secretario.....	10
Los Alguaciles.....	5

CAPITULO IV

Exhortos, cartas-órdenes y asuntos diversos.

ARTICULO XXI

Por el cumplimiento de un exhorto procedentes de juicios hasta 250 pesetas, percibirán:

	PESETAS
El Juez.....	1
El Secretario.....	1
Los Alguaciles.....	0,50
De 250 á 500 pesetas además de los tipos anteriores:	
El Juez.....	0,50
El Secretario.....	0,50
Los Alguaciles.....	0,25

En los que procedan de asuntos de 500 á 1 500 pesetas, cobrarán además de los dos tipos anteriores: el Juez y Secretario una peseta cada uno y cincuenta céntimos el Alguacil.

Cualquier otro exhorto de asunto de cuantía indeterminada, percibirán el Juez y Secretario, una peseta cincuenta céntimos cada uno y los Alguaciles una peseta.

ARTICULO XXII

En el cumplimiento de cartas-órdenes procedentes de los Juzgados de primera instancia, se devengarán los siguientes derechos:

	Juez.	Secretario.	Alguacil.
Dimanantes de asuntos cuya cuantía no exceda de 750 pesetas.....	1	1	0,50
De 1.500.....	2	2	1
» 3.000.....	2,50	2,50	1,25
» 10.000.....	3	3	1,50
» 25.000.....	3,50	3,50	1,75
» 50.000.....	4	4	2
» 50.000 en adelante.....	5	5	2,50

En los procedentes de asuntos indeterminados se aplicará la escala tercera, ó sea la de 3.000 pesetas

ARTICULO XXIII

En las informaciones posesoria se cobrarán los derechos marcados en el art. 329 del Reglamento de la Ley Hipotecaria.

Si el valor de la finca ó fincas excediese de 500 pesetas, se percibirán, además los derechos siguientes:

Cuando la finca ó fincas valgan más de 500 hasta 1.000 pesetas, percibirán por la diferencia de 500 pesetas: el Juez y Secretario, el 0,50 por 100 cada uno.

De 1.000 pesetas en adelante, cualquiera que sea el valor de los inmuebles, cobrará cada uno de dichos funcionarios el 2 por 1.000 más sobre los tipos que anteceden.

En estos expedientes el Fiscal percibirá por todos los dictámenes que emita, 2 pesetas.

ARTICULO XXIV

El repartimiento de los asuntos en los Juzgados municipales, no devengará derechos.

CAPITULO V

Del Registro civil.

ARTICULO XXV

Las certificaciones que se expidan relativas al Registro civil, continuarán devengando los derechos que señala el art. 77 del Reglamento para ejecución de dicha ley.

CAPITULO VI

Del Fiscal municipal.

ARTICULO XXVI

Por todos los dictámenes que emita el Fiscal en cada asunto en que intervenga en el Juzgado municipal, que no sean de los que taxativamente quedan marcados y excluyendo los relativos al Registro civil, cobrará derechos fijos de tres pesetas.

TÍTULO II

Negocios criminales.

CAPITULO PRIMERO

De los juicios de faltas.

ARTICULO XXVII

Por todo el juicio de faltas hasta la notificación de la sentencia inclusive y subsiguiente apelación en su caso si no hubiere más que un denunciado, se devengarán los siguientes derechos:

	<u>PESETAS</u>
El Juez.....	2
El fiscal.....	2
El Secretario.....	2
Los dos adjuntos á repartir por mitad.....	1
Los Alguaciles.....	1

Si hubiere más de un denunciado, cualquiera que sea el número de éstos, se aumentarán en 0,50 céntimos los derechos de cada funcionario excepto el Alguacil, entendiéndose los dos adjuntos como uno solo.

Los Alguaciles por cada denunciado ó testigo percibirán en todos los casos cincuenta céntimos.

ARTICULO XXVIII

Por la ejecución de la sentencia en cuanto se refiere á la pena corporal ó á la de multa, percibirán, excepto los dos adjuntos, los demás funcionarios la mitad de los derechos que á cada uno correspondan, según el artículo anterior.

En cuanto se contraiga á hacer efectivas las responsabilidades civiles, percibirán el Juez, Secretario y Alguaciles la mitad de los derechos de la escala del art. 1.º, aplicada á las cantidades que deban realizarse.

En ningún caso podrán exceder las costas todas de la ejecución de sentencia, del doble de las del juicio principal.

ARTICULO XXIX

Siempre que los Jueces, Secretarios y Alguaciles, practiquen diligencias sumariales con jurisdicción propia, devengarán los derechos asignados en el Arancel vigente á los Jueces, Secretarios y Alguaciles de los Juzgados de instrucción.

Si fuere por delegación se limitarán á la mitad de los mismos.

ARTICULO XXX

En el cumplimiento de exhortos devengarán el Juez y Secretario una peseta cincuenta céntimos cada uno, el Fiscal si interviene igual suma y veinticinco céntimos de pesetas, los Alguaciles por cada persona que deban citar ó notificar.

Por las diligencias que se practiquen para hacer efectivas las multas impuestas por autoridades gubernativas, percibirán los funcionarios que las practiquen los mismos honorarios que se fijan para la ejecución de las sentencias dictadas en juicio de faltas.

TÍTULO III

Actos comunes á los asuntos civiles y criminales.

CAPITULO PRIMERO

De los peritos.

ARTICULO XXXI

Cada Perito calígrafo por su total intervención en cada expediente civil ó criminal que se substancie en el Juzgado municipal, percibirá 10 pesetas.

ARTICULO XXXII

Los Médicos forenses y los Veterinarios percibirán por todos los reconocimientos que practiquen incluso los informes que emitan ante el Juez ó Tribunal municipal, cinco pesetas cada uno,

ARTICULO XXXIII

Los demás peritos médicos, farmacéuticos, Arquitectos, Ingenieros, Ayudantes de éstos y de obras públicas y cualquiera otro perito con título académico especial por el Gobierno ó establecimiento oficial y los tasadores de joyas y objetos de arte, percibirán los derechos que les señalen sus respectivos aranceles ó admita la costumbre, sin perjuicio de la impugnación por excesivos.

ARTICULO XXXIV

Cada perito tasador de muebles ó efectos y los demás peritos no comprendidos en los artículos precedentes, percibirán por todos sus derechos 5 pesetas cada uno.

ARTICULO XXXV

En ningún caso, la suma que corresponda percibir á todos los peritos que intervengan en los asuntos civiles ó criminales, podrá exceder del 10 por 100 de la cantidad litigiosa en los primeros ó que se trate de hacer efectiva en los segundos, sufriendo á prorrata la reducción correspondiente.

CAPITULO 2.º

Percepción de derechos.

ARTICULO XXXVI

La percepción de derechos en los Juzgados Municipales tendrá lugar con sujeción á las siguientes reglas:

En el juicio verbal y en el de desahucio, se hará efectivo el 25 por 100 al incoarse la demanda. El 50 por 100 á la terminación del juicio, y el 25 por 100 restante á la notificación de la sentencia.

En el acto de conciliación la totalidad al presentarse la demanda.

En todos los demás asuntos la mitad de los derechos á la incoación, y la otra mitad á la terminación.

En el cumplimiento de exhortos y cartas-órdenes al devolverse al portador.

ARTICULO XXXVII

Los derechos asignados en las respectivas escalas á los juicios declarativos verbales y á los de desahucio, se satisfarán en general por el demandante; pero si comparecido el demandado á su instancia se practicara prueba desde ese momento, se abonarán por mitad todos los restantes, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva en cuanto al pago de costas.

En los actos de conciliación, serán de cuenta del demandante, sin perjuicio de la condena de costas.

ARTICULO XXXVIII

Los honorarios de los peritos se pagarán por la persona á cuya instancia se haya practicado la peritación, y sin perjuicio también de lo que se resuelva en la sentencia en cuanto á costas.

ARTICULO XXXIX

A los absueltos en juicio de faltas no se les exigirá derecho alguno.

Disposiciones generales.

1.ª Siempre que hayan de practicarse diligencias á más de dos kilómetros de distancia de la población de residencia, del Juzgado, se aumentarán en un 25 por 100 los derechos del funcionario que las lleve á cabo, siendo de cuenta de la parte que inste el procedimiento los medios de locomoción que sean necesarios.

2.ª Por la extensión de una certificación de asuntos que se halle archivado más de seis meses, percibirán dos pesetas el Juez y dos el Secretario. Si la certificación excediese de cinco pliegos, ya fuese en relación ó de insertos, se devengará por cada pliego que exceda una peseta que se distribuirá por mitad entre el Juez y el Secretario.

A este efecto, la regulación de los pliegos se hará por los del original de donde estén tomados los insertos ó hecha la relación.

3.^a Por la exhibición en Secretaría de cualquier asunto concluso y que esté archivado más de seis meses, para práctica de cotejos, reconocimientos periciales ú otra diligencia análoga, devengarán el Juez y el Secretario dos pesetas cada uno.

Si la exhibición fuese de los libros del Registro civil para el cotejo de certificaciones unidas á expedientes ó autos civiles, la percepción será de dos pesetas, distribuidas por mitad entre el Juez y el Secretario.

4.^a En los casos de licencia, enfermedad ó suspensión del Secretario, cobrará la tercera parte líquida de los derechos percibidos por el funcionario que le substituya.

5.^a El pago de los derechos devengados con arreglo á este Arancel y los suplementos hechos, podrán exigirse por la vía de apremio del Procurador si interviniese, ó de la parte á cuya instancia se hayan causado en la forma que dispone el art. 8.º de la Ley de Enjuiciamiento civil, siendo requisito que la cuenta esté formulada con la cita de los artículos de este Arancel, aplicables al caso.

6.^a Los Jueces municipales dispondrán que para el conocimiento del público, se coloque en el local del Juzgado y en forma que pueda leerse con facilidad, un ejemplar impreso del presente Arancel.

7.^a El funcionario que cobre derechos superiores á los que quedan prefijados, ó los devengue en negocio no repartido, perderá los que hubiese percibido, devolviendo por la primera vez, el duplo, á la segunda el quintuplo, y á la tercera, sufrirá por vía de corrección disciplinaria, seis meses de suspensión de cargo, sin derecho en este caso á lo establecido en la 4.^a de estas disposiciones.

8.^a En ningún caso se devengarán otros derechos que los taxativamente fijados en los asuntos enumerados, incurriendo el funcionario que los percibiese, en las mismas responsabilidades que establece la disposición anterior.

9.^a Todos los gastos que origine el sostenimiento del personal y material del Juzgado municipal, en cuanto excedan de la cantidad consignada al efecto por los respectivos Ayuntamientos, se satisfará por partes iguales entre el Juez y el Secretario.

Disposición transitoria.

Todos los negocios incoados con anterioridad á 1.º de Enero de 1908, se regirán por el Arancel aprobado por el Real decreto de 4 de Diciembre de 1883.

El Diputado 4.º del Colegio de Abogados,

Ant.º Gabriel Rodríguez.

El Decano del Colegio de Procuradores,

Hilario Dago.

El Decano del Colegio de Escribanos,

Fermín Suárez Jiménez.

El Secretario del Juzgado municipal del distrito del Hospital, con la misma salvedad consignada al subscribir el preambulo,

José Ballester.

